



PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
NACIONES UNIDAS
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Vea abajo la versión en inglés
English version below

Comunicado de las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la situación de los defensores de derechos humanos con respecto a las elecciones generales en Honduras

[11 de noviembre de 2025]

GINEBRA (11 de noviembre de 2025) – *Honduras debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes, con pleno respeto a la libertad de prensa y al acceso del electorado a información fiable, detallada y objetiva. Los partidos políticos y personas candidatas deben ser responsables en sus discursos, absteniéndose de difundir desinformación, información errónea y mensajes que puedan incitar a la hostilidad, la discriminación o la violencia, y deben mostrarse claros en su compromiso de reformar las leyes y políticas para fortalecer los derechos humanos, han declarado hoy expertas de la ONU*. Con vistas a las elecciones generales del 30 de noviembre y dos años después de la visita al país de la Relatora Especial sobre libertad de expresión en octubre de 2023, las expertas han emitido el siguiente comunicado:*

“En la recta final de la campaña electoral y a pocas semanas de las elecciones del 30 de noviembre, estamos siguiendo de cerca, con cierta preocupación, el creciente clima de polarización y las amenazas y ataques a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el espacio cívico en el país, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos y observadores electorales. En este momento en que el estado de excepción sigue prorrogándose, las tensiones entre los partidos políticos están en un punto álgido y muchas reformas clave para garantizar una mayor seguridad para los actores cívicos basada en los derechos humanos siguen sin llevarse a cabo, Honduras se enfrenta a un período electoral difícil en el que los derechos humanos deben ocupar un lugar central para evitar que se repitan episodios dramáticos de violencia política del pasado.

Más de dos años después de su visita, las recomendaciones del [informe](#) de la Relatora Especial sobre libertad de opinión y expresión siguen siendo muy relevantes en el contexto actual. Resulta profundamente decepcionante que la mayoría de estas recomendaciones aún no se han implementado de manera efectiva, y es esencial que el Gobierno actual y el que resulte elegido el 30 de noviembre se comprometan a aplicarlas de manera urgente y efectiva, en cooperación con la OACNUDH en Honduras y los mecanismos regionales de derechos humanos. Además, en estos últimos años hemos llamado la atención sobre ataques, intimidación y discurso estigmatizante contra defensores de derechos humanos, activistas y voces críticas, incluyendo defensoras indígenas, y sobre la insuficiente protección otorgada por las autoridades mediante

varias comunicaciones dirigidas al Gobierno ([HND 4/2025](#), [HND 3/2025](#), [HND 2/2024](#), [HND 1/2024](#), [HND 3/2023](#)).

Observamos con preocupación una intensificación en este período preelectoral del discurso estigmatizador que desde hace tiempo se viene dirigiendo contra periodistas, defensores de los derechos humanos, comunicadores sociales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que tienen un importante rol en el monitoreo del proceso electoral. Esta estigmatización viene por parte de ciertos altos cargos del Gobierno y de los partidos políticos, así como de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, que incluye difamaciones, acusaciones infundadas, estigmatización pública, intimidación y ataques físicos y en línea en represalia por su trabajo. Estas medidas no solo pretenden suprimir la expresión de quienes son atacados, sino que también tienen un efecto disuasorio sobre los demás.

En este clima de creciente tensión, el riesgo de nuevos ataques contra periodistas y personal de los medios de comunicación se incrementa de forma alarmante. En lo que va de 2025, dos periodistas han sido asesinados, incluido uno que se encontraba bajo la protección del Sistema Nacional de Protección, lo que eleva a 31 el número total de periodistas asesinados desde 2005. Decenas de ellos han sido objeto de graves amenazas, campañas de acoso y ataques por su trabajo, desde demandas infundadas hasta denigraciones públicas. Periodistas indígenas y medios de comunicación comunitarios y alternativos han sufrido una hostilidad especialmente intensa. La falta de avances significativos en las investigaciones de los asesinatos de periodistas —con una impunidad superior al 90%— y las notables deficiencias del mecanismo de protección, que la Relatora Especial destacó en su informe y que aún no se han superado, contribuyen al clima de inseguridad que sienten los periodistas en el país.

Los políticos y los funcionarios públicos, incluidos los mandos militares y policiales, desempeñan un papel fundamental en la conformación del debate y la opinión públicas, y tienen una gran responsabilidad en el deterioro del panorama informativo. No deben abusar de su posición privilegiada para socavar la integridad electoral, incitar a la violencia, la hostilidad y la discriminación, o atacar a los medios de comunicación y la sociedad civil. Al contrario, deben fomentar la confianza de la ciudadanía en las elecciones mediante un comportamiento ético y asegurarse de que su discurso sea en todo momento acorde con los derechos humanos y respetuoso con los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Cuando se ataca la libertad de expresión y a quienes la ejercen, se ponen en peligro los procesos electorales y se resiente la confianza pública en las elecciones. Asimismo, unas elecciones que no respetan los derechos a la libertad de asamblea y asociación no pueden ser consideradas libres o justas.

También estamos preocupadas por los problemas de acceso a la información que se reportan, como el cierre de páginas web y los constantes intentos de hackeo de sitios web que publican información crítica o perjudicial para ciertos actores políticos. Además, resulta muy decepcionante la persistente falta de transparencia institucional, pues ante la mayoría de las solicitudes de información oficial, las instituciones del Estado no proporcionan respuesta o lo hacen de manera general, vaga y vacía de contenido. El flujo libre de la información, basado en el derecho a buscar, recibir y publicar información, es una condición previa esencial para unas elecciones libres, justas y democráticas.

Las enormes tensiones entre partidos en el Congreso Nacional, las desavenencias entre consejeros del Consejo Nacional Electoral y la parálisis del Tribunal de Justicia Electoral, ponen en riesgo el buen desarrollo de las elecciones. Esta crisis institucional debilita el sistema democrático, socava la protección de los derechos humanos y, en última instancia, podría deslegitimar las elecciones. Es particularmente preocupante el hostigamiento a los órganos electorales, incluyendo el CNE. Manipular las narrativas sobre la fortaleza del sistema electoral para evitar el fraude son peligrosas y ponen en riesgo no sólo a actores políticos en disputa electoral, sino también a la sociedad civil, activistas y defensores; además de debilitar la confianza ciudadana hacia la democracia y sus instituciones.

Los funcionarios gubernamentales, por un lado, y representantes de la sociedad civil y periodistas, por el otro, manifiestan su constante preocupación por la desinformación e información engañosa destinada a socavar o desacreditar a la otra parte, en un clima subyacente de falta de confianza mutua. Honduras debería desarrollar estrategias multidimensionales, incluyentes de todas las partes interesadas y basadas en los derechos humanos para contrarrestar la desinformación electoral. El Estado debe cumplir con su propia responsabilidad de proporcionar información objetiva, veraz y puntual, y abstenerse de restringir el libre flujo de información, salvo de conformidad con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y objetivos legítimos establecidos en el derecho internacional.

En este contexto electoral, más que nunca, es esencial invertir esfuerzos en generar confianza en el conjunto de la sociedad. Los estados de excepción afectan de forma grave el ejercicio electoral, antes, durante y después de las elecciones. Es indispensable, entonces, que los poderes extraordinarios no sean utilizados para restringir y reprimir las libertades fundamentales y la participación. Muy al contrario, es crucial respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, garantizar la transparencia y el acceso a la información, asegurar la integridad de la información, fomentar la tolerancia y crear condiciones para que la pluralidad de opiniones y el disenso puedan expresarse de forma libre y respetuosa.

Con base en estas observaciones y al momento crítico que vive Honduras, hacemos las siguientes **RECOMENDACIONES**:

- En este contexto preelectoral, todos los candidatos electorales y partidos políticos deben poder ejercer su derecho a hacer campaña libremente y en condiciones de seguridad y de igualdad de armas. Los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, asamblea pacífica y asociación deben ser garantizados a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna.
- Periodistas y medios de comunicación, incluyendo los indígenas, comunitarios y alternativos, deben ser respetados en su derecho a cubrir libre e íntegramente las elecciones e informar a la ciudadanía de forma independiente y de acuerdo con su línea editorial. La pluralidad y diversidad de información y medios debe ser garantizada. La política publicitaria del Estado no debe discriminar y favorecer a ciertos medios sobre otros por motivos políticos o comerciales.

- Los observadores electorales, incluidos los defensores de los derechos humanos, deben estar protegidos de cualquier forma de intimidación, ataques o violencia.
- Los órganos electorales estatales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y demás autoridades, deben asegurar unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, garantizando la libre circulación, publicación, acceso y recepción de información electoral, política y periodística, incluyendo en las lenguas de los Pueblos Indígenas.
- Las autoridades estatales, funcionarios, candidatos y partidos políticos deben tener en cuenta el impacto de sus declaraciones en el discurso político y deben evitar escrupulosamente en todo momento los mensajes que puedan incitar al odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia.
- Las instituciones estatales, autoridades públicas, líderes políticos y fuerzas de seguridad deben cesar de cualquier tipo de amenazas, campañas de desprestigio o descalificación de periodistas y defensores de los derechos humanos y fomentar un entorno que respete el pluralismo mediático y sea tolerante con la crítica pública.
- El Sistema Nacional de Protección debe poner en marcha medidas concretas y protocolos específicos de atención para la protección a periodistas y ser dotado de los recursos y autonomía necesaria para actuar de manera independiente, con atención a las mujeres periodistas, así como a periodistas indígenas y comunitarios.
- Los candidatos deben hacer promesas concretas y comprometerse a reformas efectivas que avancen y promuevan la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el espacio cívico y los derechos humanos, así como la seguridad de los periodistas, defensores de derechos humanos y agentes de la sociedad civil. El próximo gobierno electo debe considerar con seriedad y urgencia las recomendaciones que expuse en el [informe](#) sobre su visita a Honduras de la Relatora Especial sobre libertad de expresión y hacer de las reformas legislativas y de políticas públicas necesarias una prioridad.

FIN

**Las expertas:*

Irene Khan, [Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión](#);

Mary Lawlor, [Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos](#);

Gina Romero, [Relatora Especial sobre los derechos de reunión pacífica y asociación](#).

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si

bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaria de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos <https://uhri.ohchr.org/en/>

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: hrc-sr-freedex@un.org.

*Para asuntos relacionados con Honduras, consulte:
<https://www.ohchr.org/en/countries/honduras>*

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en X: @UN_SPExperts



SPECIAL PROCEDURES
UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS COUNCIL

Statement by the United Nations Special Rapporteurs on the right to freedom of opinion and expression, on the rights to freedom of peaceful assembly and association and on the situation of human rights defenders on the forthcoming general elections in Honduras

[11 November 2025]

GENEVA (11 November 2025) – *Honduras must guarantee free, fair and transparent elections, with full respect for freedom of the press and access of the electorate to reliable, detailed and factual information. Political parties and candidates must be responsible in their speech, refraining from disinformation, misinformation and advocacy that could incite hostility, discrimination or violence, and clear in their commitment to reform laws and policies to strengthen human rights, UN experts* said today. Ahead of the general elections of 30 November and two years after the visit to the country by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression in October 2023, the experts issued the following statement:*

"In the final stretch of the election campaign and just weeks before the 30 November elections, we are following closely, with some concern, the growing climate of polarisation and the threats and attacks on press freedom, freedom of expression and civic space in the country, including human rights defenders and election observers. As the state of exception in the country continues to be extended, tensions between political parties are at their peak, and key reforms to ensure an enhanced human rights-based safety for civic actors remain undone, Honduras faces a challenging electoral period during which human rights must be at the centre to prevent the repetition of dramatic episodes of political violence of the past.

More than two years after her visit, the recommendations in the [report](#) of the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression remain highly relevant in the current context. It is deeply disappointing that most of these recommendations have not yet been effectively implemented, and it is essential that the current Government and the one elected on 30 November commit to their urgent and effective implementation, in cooperation with the OHCHR Office in Honduras and the regional human rights mechanisms. Moreover, in the last years we have drawn attention to attacks, intimidation and stigmatising discourse against human rights defenders, activists and critical voices, including indigenous defenders, and the insufficient protection provided by the authorities through several communications addressed to the Government ([HND 4/2025](#), [HND 3/2025](#), [HND 2/2024](#), [HND 1/2024](#), [HND 3/2023](#)).

We note with concern an intensification in this pre-election period of the longstanding stigmatizing discourse against journalists, human rights defenders, social communicators, civil society organisations and other actors who play an important role in monitoring the electoral process. This stigmatisation comes from political leaders coming from certain

senior members of the Government and political parties, as well as of the Armed Forces and other security forces, including vilification, unfounded accusations, public stigmatisation, intimidation, online and physical attacks in retaliation for their work. Such measures not only seek to suppress expression of those who are attacked but also have a chilling effect on others.

In this increasingly tense climate, the risk of further attacks against journalists and media workers is alarmingly heightened. So far in 2025, two journalists have been killed, including one who was under the protection of the National Protection System, bringing the total number of journalists killed to 31 since 2005. Dozens have been subjected to serious threats, harassment campaigns and attacks for their work, ranging from vexatious lawsuits to public vilification. Indigenous journalists and community and alternative media have experienced particularly intense hostility. The lack of significant progress in the investigations of killings of journalists — with impunity exceeding 90%—and the notable shortcomings of the protection mechanism, which the Special Rapporteur highlighted in her visit report and which are yet to be overcome, contribute to the climate of insecurity felt by journalists in the country.

Politicians and public officials, including military and police commanders, play a central role in shaping public debate and opinion and they bear a significant responsibility for the degradation of the information environment. They should not abuse their privileged position to undermine electoral integrity, incite violence, hostility and discrimination or attack the media and civil society. Instead, through ethical behaviour, they should build public trust in elections and ensure that their discourse is at all times consistent with human rights and respectful of journalists and human rights defenders. When freedom of expression and those who exercise it are attacked, electoral processes are jeopardised and public confidence in elections suffers. Similarly, elections that do not respect the rights to freedom of assembly and association cannot be considered free or fair.

We are also concerned about the reported problems of access to information, including the takedown of web pages and constant attempts to hack websites that publish information critical or damaging to certain political actors. Furthermore, the persistent lack of institutional transparency is very disappointing, as state institutions fail to respond to most requests for official information or provide only general and vague answers. The free flow of information, based on the right to seek, receive and publish information, is an essential pre-condition for free, fair and democratic elections.

The heightened tensions between parties in the National Congress, the disagreements between members of the National Electoral Council and the paralysis of the Electoral Court of Justice jeopardise the satisfactory conduct of the elections. This institutional crisis weakens the democratic system, undermines the protection of human rights and could ultimately delegitimise the elections. The harassment of electoral bodies, including the Council, is particularly worrying. Manipulating narratives about the strength of the electoral system to prevent fraud is dangerous and puts at risk not only political actors in electoral disputes, but also civil society, activists and defenders, as well as undermining public confidence in democracy and its institutions.

Government officials, on the one hand, and civil society representatives and journalists, on the other, remain seriously concerned about disinformation and misinformation aimed at undermining or discrediting each other, in an underlying climate of lack of mutual trust. Honduras should develop multifaceted, multi-stakeholder, human rights-based strategies to counter electoral disinformation. The State should fulfil its own responsibility to provide factual and timely information, and refrain from restricting the free flow of information, except in accordance with the requirements of legality, necessity, proportionality and legitimate objectives set out in international law.

In this electoral context, more than ever, it is essential to invest efforts in building trust throughout society. States of exception seriously affect the electoral process, before, during, and after elections. It is therefore essential that extraordinary powers not be used to restrict and repress fundamental freedoms and participation. On the contrary, it is critical to respect media freedom and pluralism, guarantee transparency and access to information, ensure the integrity of information, promote tolerance and create conditions for the plurality of opinions and dissent to be expressed freely and respectfully.

Based on these observations and noting the critical moment Honduras is experiencing, we make the following **RECOMMENDATIONS**:

- In this pre-election context, all electoral candidates and political parties must be allowed to exercise their right to campaign freely and in conditions of security and equality of arms. The rights to freedom of expression, access to information, peaceful assembly and association must be guaranteed to all citizens equally, without discrimination.
- Journalists and media outlets, including indigenous, community and alternative media, must be respected in their right to cover the elections freely and comprehensively and to inform the public independently and in accordance with their editorial line. The plurality and diversity of information and media must be guaranteed. The State's advertising policy must not discriminate and favour certain media over others for political or commercial reasons.
- Election observers, including human rights defenders, must be protected from any form of intimidation, attacks, or violence.
- State electoral bodies, including the National Electoral Council, the Electoral Court of Justice and other authorities, must ensure fair, democratic and transparent elections, guaranteeing the free circulation, publication, access and reception of electoral, political and journalistic information including in the languages of the Indigenous Peoples.
- State authorities, officials, candidates and political parties must bear in mind the impact of their statements on the political discourse, and must scrupulously avoid at all times messages that may incite hatred, discrimination, hostility or violence.

- State institutions, public authorities, political leaders and security forces must cease any type of threats, smear campaigns or vilification of journalists and human rights defenders and promote an environment that respects media pluralism and is tolerant of public criticism.
- The National Protection System should put in place specific measures and protocols for the protection of journalists and be provided with the necessary resources and autonomy to act independently, with special attention to women journalists as well as indigenous and community journalists.
- Candidates must make concrete promises and commit to effective reforms that advance and promote democracy, freedom of expression, freedom of the press, civic space and human rights, as well as the safety of journalists, human rights defenders and civil society actors. The next elected Government should give serious and urgent consideration to the recommendations the Special Rapporteur on freedom of expression set out in the report on her visit to Honduras and make the necessary legislative and public policy reforms a priority.

ENDS

**The experts:*

Irene Khan, [UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression](#);

Mary Lawlor, [Special Rapporteur on the situation of human rights defenders](#);

Gina Romero, [Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association](#).

Special Rapporteurs/Independent Experts/Working Groups are independent human rights experts appointed by the United Nations Human Rights Council. Together, these experts are referred to as the [Special Procedures](#) of the Human Rights Council. Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. While the UN Human Rights office acts as the secretariat for Special Procedures, the experts serve in their individual capacity and are independent from any government or organization, including OHCHR and the UN. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the UN or OHCHR.

Country-specific observations and recommendations by the UN human rights mechanisms, including the special procedures, the treaty bodies and the Universal Periodic Review, can be found on the Universal Human Rights Index <https://uhri.ohchr.org/en/>

For inquiries and media requests, please contact: hrc-sr-freedex@un.org.

For matters related to Honduras, please check: <https://www.ohchr.org/en/countries/honduras>

Follow news related to the UN's independent human rights experts on X: [@UN_SPExperts](#)